

Entre Washington y Caracas: los límites del giro de Petro frente al ELN

FiP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Análisis de coyuntura

Entre Washington y Caracas:

los límites del giro de Petro frente al ELN

Director Conflicto y Seguridad de la FIP

Javier Flórez

Autores

Javier Flórez

Andrés Cajiao

Edición y corrección de estilo

Elizabeth Reyes Le Paliscot

Diseño y diagramación

Christian Benito R

ISBN

--

Foto de portada: Un soldado patrulla en el casco urbano de Tibú, corazón del Catatumbo, en mayo de 2025, tras la crisis humanitaria desatada por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33.

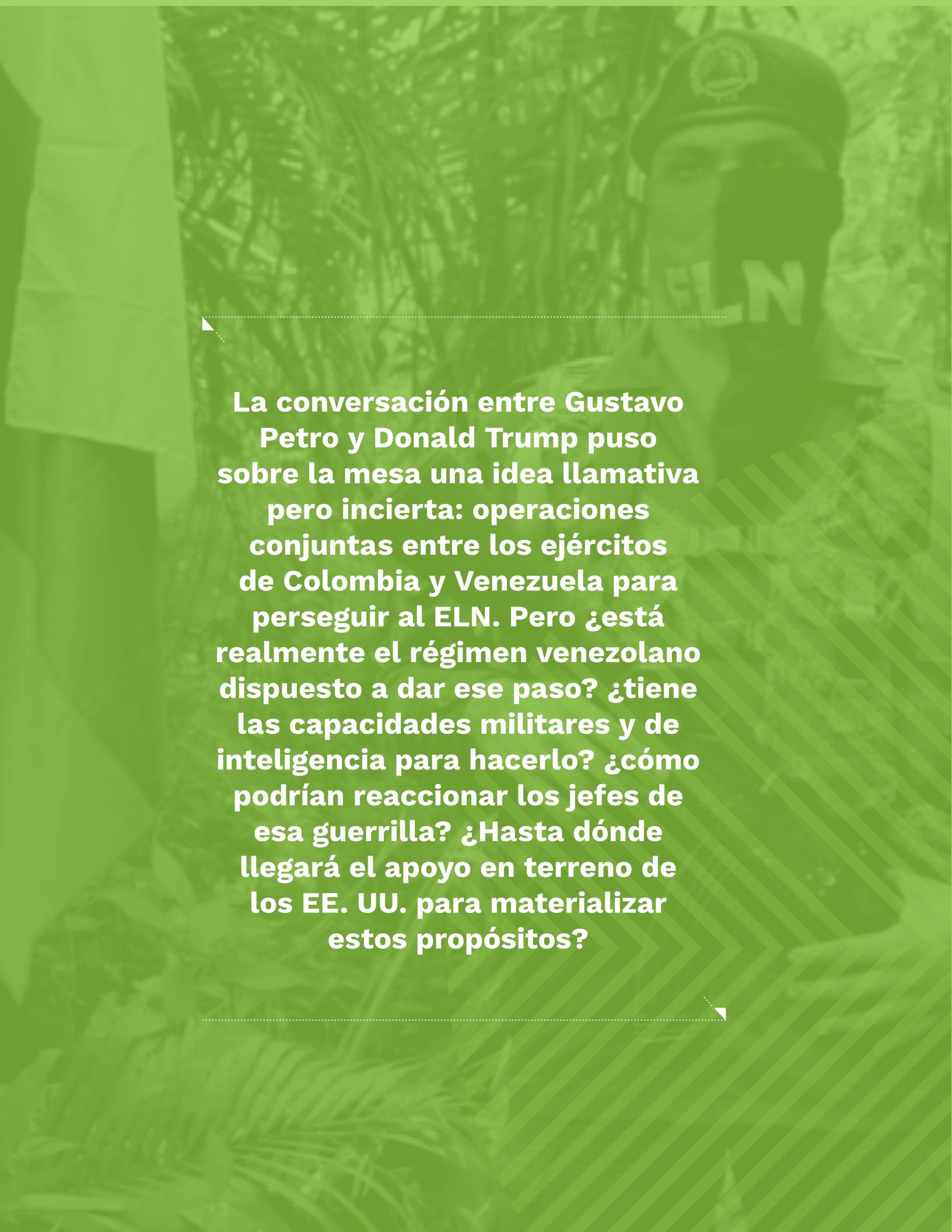
Foto: Julián Ríos Monroy

Febrero, 2026

- Fundación Ideas para la Paz (FIP)
- Calle 100 #8A-55, Torre C, Oficina 207. Bogotá
- Tel. +57 316 472 9985
- www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

Contenido

- 7 Venezuela: más expectativas que cambios reales para la seguridad en Colombia
- 8 La presión de Estados Unidos y el rol de Venezuela frente a los grupos armados
- 9 El ELN: entre la negociación y una nueva ofensiva en Colombia



La conversación entre Gustavo Petro y Donald Trump puso sobre la mesa una idea llamativa pero incierta: operaciones conjuntas entre los ejércitos de Colombia y Venezuela para perseguir al ELN. Pero ¿está realmente el régimen venezolano dispuesto a dar ese paso? ¿tiene las capacidades militares y de inteligencia para hacerlo? ¿cómo podrían reaccionar los jefes de esa guerrilla? ¿Hasta dónde llegará el apoyo en terreno de los EE. UU. para materializar estos propósitos?

Durante décadas, Venezuela ha sido un factor especialmente sensible para la seguridad en la zona fronteriza con Colombia. En ese territorio puro y débilmente controlado, grupos armados como las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, más recientemente, estructuras disidentes de las FARC —la Segunda Marquetalia, el Frente 33 del EMBF y, en su momento, el Frente 10 del EMC— han utilizado la parte venezolana como refugio, reaguardia estratégica y fuente de financiación. Esta dinámica ha limitado la capacidad de acción del Estado colombiano y ha contribuido al fortalecimiento de estas organizaciones ilegales.

Conviene recordar que, durante los diálogos de paz con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el entonces mandatario venezolano Hugo Chávez desempeñó un papel activo como mediador y facilitador. Chávez ofreció a Venezuela como sede e interlocutor para reuniones exploratorias, apoyó gestiones diplomáticas y respaldó iniciativas orientadas a generar confianza entre las partes. Aunque su intervención no estuvo exenta de críticas, fue vista como un aporte para destrabar el proceso y convencer a sectores de las FARC de que había llegado el momento de apostarle a la paz.

En el caso del ELN, es ampliamente conocido que buena parte del Comando Central, de su Dirección Nacional y también de algunas estructuras de la Segunda Marquetalia se desplazan y operan en territorio venezolano. Por eso, la detención de Nicolás Maduro y la posible reconfiguración del poder en el vecino país plantean dudas sobre las implicaciones que este nuevo contexto podría tener para la seguridad de Colombia.

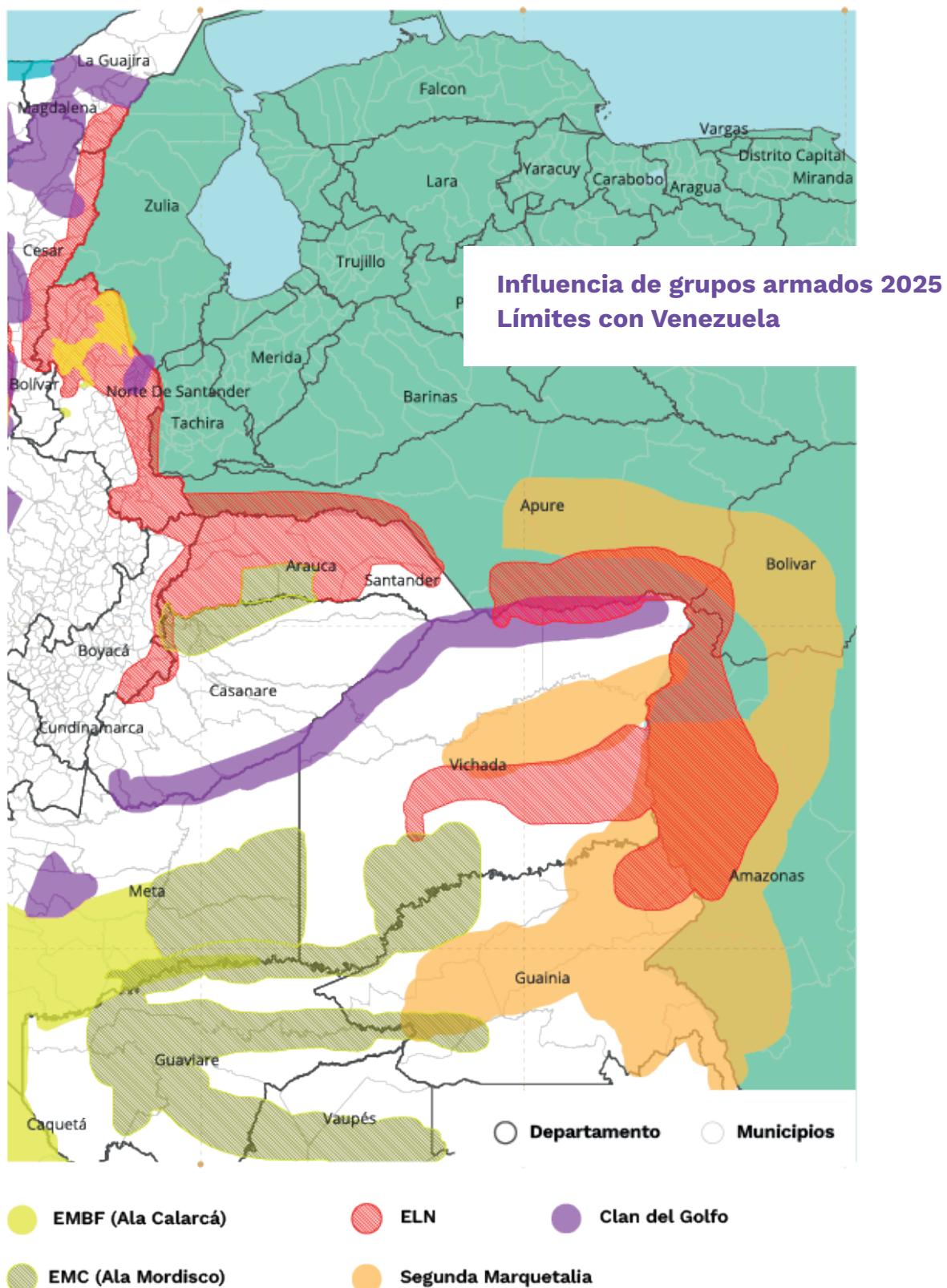
De hecho, los días posteriores al asalto militar de Estados Unidos en Caracas, el ELN y sus nexos con el

narcotráfico y la violencia en la frontera ocuparon un lugar central en la conversación del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. Esto terminó añadiendo presión a la ya frágil posibilidad de reanudar las negociaciones de paz con esa guerrilla, que llevan un año suspendidas.

El tema volvió a surgir en su encuentro en la Casa Blanca: Petro propuso que los dos países trabajaran conjuntamente, a través del intercambio de inteligencia, para golpear a los principales cabecillas del narcotráfico: “*hay que ir por los capos de capos y sus capitales*”, dijo en referencia a quienes operan fuera de Colombia. También anunció que está sobre la mesa la posibilidad de adelantar operaciones entre los ejércitos de Venezuela y Colombia para perseguir a los “*arrodiados al narcotráfico*”, en clara alusión al ELN.

Aunque el presidente Petro ha reiterado su disposición a retomar el diálogo con esa guerrilla, al mismo tiempo ha ido endureciendo su postura, lo que profundiza la incertidumbre sobre el rumbo de la seguridad en la frontera: ya sea por una reacción del ELN frente a estas advertencias o por los efectos de eventuales operaciones de la Fuerza Pública en su contra.

Poco se sabe de los cambios concretos que traería la eventual transición política en Venezuela, del rumbo que tomará la relación del gobierno colombiano con Estados Unidos —aunque tras la conversación con Trump el presidente aseguró que “*nace un nuevo camino*”—, y de cómo todo ello impactará en las dinámicas de la seguridad en la frontera. Por ello, resulta apresurado anticipar las reacciones de los grupos armados y sus efectos sobre la seguridad nacional. Precisamente por esa incertidumbre, este análisis se adentra en tres frentes clave que podrían marcar el rumbo en el corto plazo.



Fuente: Trabajo de campo y Base de Datos de Acciones del Conflicto de la FIP.

1. Venezuela: más expectativas que cambios reales para la seguridad en Colombia

Como lo ha advertido el propio presidente de Estados Unidos, la transición política en Venezuela no será inmediata, sino un proceso prolongado, lo que sugiere que las condiciones estructurales del régimen seguirán intactas, al menos en el corto y mediano plazo. A esto se suma que las prioridades tanto de Washington como de un eventual nuevo gobierno venezolano parecen concentrarse en lo económico y lo político, dejando en un segundo plano la seguridad interna y una reforma profunda de la Fuerza Pública.

Por eso, es improbable que, incluso con las pretensiones del presidente Petro, se modifiquen de manera sustancial las condiciones que hoy favorecen la presencia y operación de los grupos armados colombianos en Venezuela. Para que eso ocurriera, sería necesario un cambio de fondo de las Fuerzas Armadas venezolanas —altamente permeadas por estas organizaciones—, así como una transformación real de las estructuras de poder locales y nacionales que las consideran aliadas del régimen. También haría falta el fortalecimiento de las capacidades militares, orientado a golpear sus operaciones y a desmantelar las economías ilícitas que las sostienen. En la práctica, esto implicaría una reconstrucción integral del aparato político y militar del Estado venezolano.

Incluso si la transición política logrará cierto grado de estabilidad, ya sea a través de pactos internos o de acuerdos con actores como Estados Unidos, no hay señales claras de que eso vaya a traducirse, al menos por ahora, en una reconfiguración significativa de los grupos armados.

Solo si un escenario de ese tipo llegara a materializarse podría convertirse en una fuente real de preocupación para el ELN y las disidencias, aunque difícilmente provocaría un retorno masivo de comandantes o de estructuras a territorio colombiano. Tan-

to el ELN como la Segunda Marquetalia han logrado expandirse en Venezuela, donde controlan territorios no solo por su relación con sectores de la Fuerza Pública y las autoridades locales, sino también por la consolidación de un entrampado económico que les garantiza recursos y sostenibilidad.

En lo que sí hay dudas al interior del ELN, según fuentes cercanas a esa guerrilla, es en la reconfiguración de los mandos medios y el posible debilitamiento de algunas de sus zonas de influencia en Venezuela. Esto apunta más a ajustes tácticos puntuales que a la adopción de una respuesta estratégica uniforme ante el nuevo orden y la presión internacional.

En el ELN, las disidencias y otras redes criminales tienen intereses profundamente ligados a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y los corredores de contrabando. Hoy, sus dinámicas responden menos a motivaciones ideológicas y más a lógicas concretas como el control territorial, el acceso a rentas y la provisión de “protección” en zonas donde la presencia del Estado venezolano es débil o simplemente no existe. Su permanencia en ese país depende, ante todo, de la capacidad real de dominar espacios y generar ingresos, incluso con el visto bueno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por ello, un cambio político formal en Caracas tendría escaso impacto, en el corto plazo, sobre estos incentivos.

Ese entrampado de intereses ayuda a entender el nivel de arraigo que estas organizaciones han construido en Venezuela, lo que vuelve aún menos probable un repliegue significativo hacia Colombia. En el caso del ELN, la mayoría de sus integrantes y varios de sus mandos locales del lado venezolano son ciudadanos de ese país, lo que, junto al poder territorial y económico acumulado en los últimos años, sugiere que su rol seguirá siendo más relevante en Venezuela y en cualquier transición política, antes que convertirse en un factor inmediato de desestabilización para Colombia.

Algo similar ocurre con la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC con poca incidencia en Colombia y con una presencia focalizada, principalmente, en el sur de la frontera colombo-venezolana. Un eventual retorno a Colombia implicaría alcanzar un acuerdo con el ELN —poco probable dada la disputa que ambas organizaciones sostienen en Vichada—, o la intensificación de la confrontación a lo largo de la frontera, con altos costos para ambos grupos.

2. La presión de Estados Unidos y el rol de Venezuela frente a los grupos armados

Uno de los factores que ha permitido el fortalecimiento del ELN y de las disidencias en la frontera ha sido la limitada capacidad para adelantar operaciones binacionales conjuntas. La porosidad de este corredor, la facilidad con la que estos grupos se desplazan de un lado a otro y la ausencia —o debilidad— de acciones por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, les han permitido evadir con relativa facilidad los operativos de la Fuerza Pública del lado colombiano.

Si la nueva “coalición” entre Caracas y Washington decidiera mostrar resultados concretos en cooperación en seguridad para ganar legitimidad internacional, podría generarse cierta presión para limitar la presencia de actores armados colombianos en Venezuela. Bajo esta lógica, no sorprenderían acciones selectivas contra mandos del ELN o de la Segunda Marquetalia, pensadas más como gestos políticos hacia Estados Unidos que como el inicio de una ofensiva a gran escala.

Sin un relevo político en Venezuela, la tolerancia hacia el ELN difícilmente desaparecerá por completo mientras siga siendo visto como un actor funcional al orden local. Para evitar conflictos, el nuevo gobierno podría optar por arreglos informales o mecanismos de coexistencia con estos grupos, siempre que no al-

teren el equilibrio territorial y mantengan algún grado de cooperación tácita. Ese margen de tolerancia permitiría tanto al ELN como a las disidencias conservar sus refugios transfronterizos, ampliar su capacidad operativa y moverse con mayor flexibilidad entre ambos países.

No hay que olvidar que, en su V Congreso, realizado a finales de 2014, el ELN afirmó de forma explícita su apoyo y defensa de la Revolución Bolivariana venezolana como parte integral de su proyecto político, ratificado posteriormente en su II Conferencia Nacional Militar de 2016 y en su VI Congreso de 2024. Con esta decisión, la guerrilla institucionalizó una relación política e ideológica con el modelo chavista que va más allá de la cooperación táctica, presente en sus discursos y acciones, lo que ayuda a explicar tanto su presencia y expansión en zonas fronterizas como la solidaridad retórica y narrativa que ha expresado en momentos de tensión regional.

El escenario opuesto —una ofensiva militar directa del Estado venezolano contra estos grupos—, tampoco ofrece mayores certezas. Hoy, las fuerzas oficiales no cuentan con las capacidades necesarias para enfrentarlos de manera sostenida. En 2021, las Fuerzas Armadas Bolivarianas lanzaron una ofensiva contra el Frente 10 de las disidencias de las FARC en el estado de Apure¹, pero la operación resultó un fracaso: ocho militares venezolanos fueron retenidos² y quedó en evidencia la dificultad para sostener una confrontación, incluso contra una estructura de bajo perfil. La expulsión de este grupo solo fue posible tras la intervención del ELN.

Junto a esa guerrilla, las disidencias de las FARC y otras bandas criminales cumplen un papel central en las dinámicas fronterizas y en las zonas de mayor

• • •

¹ <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/en-apure-se-da-la-primera-rebelion-de-una-disidencia-contra-el-chavismo/>

² <https://elpais.com/internacional/2021-05-16/venezuela-denuncia-el-secuestro-de-ocho-militares-en-la-frontera-con-colombia.html>

valor económico de Venezuela. El control de pasos fronterizos, rutas del narcotráfico y enclaves mineros —en el Arco Minero y otras áreas estratégicas— está hoy en manos del ELN y de la Segunda Marquetalia. Una eventual intervención militar podría abrir la puerta a un reacomodo de organizaciones criminales de menor escala dispuestas a disputar estas rentas, profundizando la inestabilidad en territorio venezolano.

Este escenario también podría abrir la puerta a una eventual redistribución de tropas desde la frontera colombiana hacia Venezuela. Sin embargo, se trata de una posibilidad remota, dado que persisten disputas activas con estructuras disidentes en Catatumbo y Arauca, que demandan una alta concentración de la Fuerza Pública.

3. El ELN: entre la negociación y una nueva ofensiva en Colombia

Aliviar la tensión actual con Estados Unidos se ha convertido en una prioridad para el gobierno colombiano. Para lograrlo, el presidente Petro necesita mostrar resultados más contundentes en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados, en particular el ELN. A esto se suma la presión por exhibir avances en seguridad en un momento en que la violencia en la frontera alcanza uno de sus picos más altos y el país entra en un año electoral. De ahí el giro hacia una postura más dura frente al ELN: negociar bajo los “términos” del gobierno o enfrentar la vía militar. Una prueba de ese endurecimiento fue el bombardeo del 4 de febrero contra esa guerrilla en el Catatumbo, ocurrido pocas horas después de la reunión del presidente Petro con Trump³.

Para el ELN, la negociación podría representar una salida estratégica para ganar oxígeno. Le permitiría evitar acciones militares tanto en Colombia como en Venezuela y, con ello, reducir la presión de

Estados Unidos en su contra. Si se sigue la secuencia que ha caracterizado su comportamiento en el pasado —paro armado, tregua navideña, gestos de buena voluntad y luego la reactivación de la mesa—, no sorprendería que la guerrilla esté enviando señales para reabrir las negociaciones en el corto plazo. Mantener la mesa andando, aunque con avances limitados, le daría tiempo para adaptarse a un eventual reacomodo del escenario venezolano y a un posible cambio de gobierno en Colombia.

En todo caso, el proceso de paz con el ELN atraviesa un momento crítico, no solo porque la mesa de diálogos permanece congelada, sino porque esta vía podría no ser bien recibida por Estados Unidos, a la luz de los pobres avances de la política de Paz Total. En este contexto se abren dos escenarios.

El primero es la reapertura de la mesa, acompañada de logros iniciales rápidos, más orientados a producir efectos electorales que transformaciones de fondo. Esto podría calmar temporalmente el ambiente interno —sobre todo tras el repunte de la violencia en el Catatumbo—, pero con el riesgo de volver a tensionar la relación con Washington.

El segundo escenario es una nueva ofensiva militar contra el ELN en la frontera. Esta opción también podría resultar funcional para el gobierno colombiano, al permitirle mostrar acciones concretas en materia de seguridad y, al mismo tiempo, mantener una relación fluida con el gobierno de Trump. Sin embargo, enfrenta retos importantes. Las ofensivas militares de gran escala en la frontera no son nuevas y, en el pasado, han tenido poco éxito. Esto se explica, en buena parte, por las dificultades geográficas, el alto grado de control territorial de estos grupos y la facilidad de tránsito entre los dos países, factores que hoy

• • • •

³ <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/atenicion-fuerzas-militares-reporta-operacion-de-bombardeo-en-el-cataumbo-contra-el-eln-y-el-frente-3529603>

harían indispensable una acción coordinada y binacional con las Fuerzas Militares venezolanas.

Hay que tener en cuenta que este escenario no depende únicamente de la voluntad política del gobierno venezolano. También requiere, como ya se mencionó, un proceso profundo de depuración y transformación de sus Fuerzas Militares —incluido el fortalecimiento de capacidades—, hoy ampliamente permeadas y beneficiadas por las economías ilegales. Esta realidad facilita la filtración de información hacia el ELN y las disidencias, genera un desbalance de poder a favor de estos grupos y dificulta la sostenibilidad de cualquier acción en territorio venezolano.

Por otro lado, una mayor ofensiva militar puede derivar en un escenario de inestabilidad que el régimen difícilmente estaría dispuesto a asumir en el contexto político actual. En el caso colombiano, esto provocaría reacciones de las organizaciones armadas que, aunque podrían reducir la confrontación directa entre ellas, lo harían a costa de un aumento de los ataques contra la infraestructura, los bienes civiles y la Fuerza Pública, manteniendo —e incluso profundizando— el impacto humanitario.

La coyuntura en Venezuela, lejos de alterar las condiciones estructurales que alimentan la violencia en la frontera, ha desviado la atención hacia la agenda geopolítica, relegando a un segundo plano una emergencia que ha desplazado a decenas de miles de civiles, fracturado comunidades enteras y profundizado una crisis humanitaria que sigue siendo una de las más graves en el país.

Así las cosas, una eventual transición en Venezuela y la reconfiguración de sus relaciones con Estados Unidos no representan, por sí solas, un punto

de quiebre para la seguridad en Colombia. Más bien, se incorporan como un nuevo factor de incertidumbre que se superpone a dinámicas armadas profundamente arraigadas en la frontera desde hace años.

Las condiciones que han permitido al ELN, a las disidencias y a otras redes criminales consolidar refugios, economías ilícitas y control territorial en Venezuela difícilmente se modificarán en el corto plazo, incluso bajo un nuevo orden político administrado desde Caracas y Washington, y pese a las buenas intenciones del presidente Petro. El anuncio de posibles operaciones conjuntas para golpear al narcotráfico y al ELN en la frontera pueden aparecer, pero difícilmente cambiarán el mapa de influencia de estos grupos a menos que cuenten con un respaldo decisivo de Estados Unidos sobre el terreno, un escenario que, al menos por ahora, parece poco probable.

Colombia enfrenta un momento en el que la presión internacional, las tensiones diplomáticas y el calendario electoral interno pueden empujar decisiones —incluida una nueva ofensiva militar contra el ELN— con efectos inciertos y costos elevados en los territorios. Sin cambios reales en las Fuerzas Militares venezolanas ni una presencia estatal permanente en la frontera, cualquier ajuste en la política de seguridad tendrá un impacto limitado. Lo más probable es que derive en nuevos reacomodos armados, más violencia y un mayor impacto humanitario, evidenciando que la frontera colombo-venezolana sigue siendo el reflejo de debilidades estructurales que el país no logra resolver.

Entre Washington

y Caracas:

los límites del giro de Petro frente al ELN

ideaspaz.org